

Los avatares del Plan Colombia, Plan Dignidad y el Plan Puebla Panamá

Sumario

La identidad de los tres planes. Los soportes financieros y los ganadores de los planes. El eje estratégico de los planes. Plan Puebla Panamá (PPP). El PPP envuelve a Panamá. Los acuerdos en Panamá. Movilización militar en Nicaragua. Paramilitarismo en Guatemala. Los puentes del Plan Colombia con el PPP. Recursos militares del PPP. Lo que preocupa a los inversores del PPP.

Resumen

Los planes que se han establecido en América Latina, lejos de intentar erradicar el narcotráfico, tienen dos objetivos claros: crear las condiciones propicias para privatizar los recursos públicos que tengan que ver con el agua, la energía y corredores biológicos; incrementar el paramilitarismo para custodiar las futuras inversiones y crear programas de limpieza social para eliminar la posibilidad de protestas en la región.

Palabras clave: *Narcotráfico, paramilitares y democracia.*

Abstract

The plans established in Latin America, instead of eradicating the drug traffic, have two clear objectives: to create the propitious conditions to privatize the resources public related to the water, the energy and biological route; to increase the paramilitaries to guard the future investments and to create programs of social cleaning to eliminate the possibility of protests in the region.

Key words: *Drug traffic, paramilitaries and democracy.*

Artículo: *recibido, octubre de 2002; aprobado, octubre de 2002*

Robinson Salazar Pérez: *Universidad Autónoma de Sinaloa, México*

Correo electrónico: *robinsson@mzt.megared.net.mx*



Los avatares del Plan Colombia, Plan Dignidad y el Plan Puebla Panamá

Robinson Salazar Pérez

La instrumentación de los tres planes intervencionistas de nuevo cuño por parte de Estados Unidos en el territorio latinoamericano tiene intereses preclaros de carácter económico-financiero, de innovación de recursos de control social que legitimen los nuevos negocios, las privatizaciones de los patrimonios públicos, la desigualdad y exclusión social; todo esto conlleva a estructurar un nuevo campo de poder en la región donde se anclan los planes Dignidad, Colombia y Puebla Panamá.

Justamente cuando se está agotando el modelo de dominación tradicional que tenía como protagonista al empresario criollo, patrimonialista, lactado por el Estado y protegido por las fuerzas oficiales del orden, y en el momento en que se desanudan las formas de control social (partidos políticos, sindicatos, asociaciones corporativizadas por el Estado, cuerpos policiales, etcétera) aparecen los planes con la intención de recuperar el orden con acciones novedosas que coadyuven a la política neoliberal privatizadora; la cual apunta hacia el control de los recursos del agua, el ecosistema y la energía.

La parte operativa de los tres planes no ha sido tarea fácil, ha encontrado resistencia en los pueblos indígenas y la población campesina, especialmente en la zona del Chapare (Bolivia) y en el sur de Colombia; no obstante, la violencia se ha dado como el recurso más eficaz para resolver las diferencias y los conflictos de intereses; muchas veces al margen del ámbito estatal pero más cercano a la esfera paramilitar, debido a que al encontrarse las distintas fracciones y grupos de la vieja clase dominante en reestructuración, los controles político-sociales se han desajustado y no funcionan con eficacia. Por ello, han echado mano de la conformación, contratación y operatividad de los grupos paramilitares para solucionar toda contingencia que ponga en riesgo los intereses de las empresas y los nuevos propietarios.

De esta manera funcionan el Plan Colombia y el Plan Dignidad, pero ya se asoman los mismos recursos paramilitares y de violencia en el corredor del Plan Puebla Panamá; lo cual indica que nos acercamos a una problemática compleja donde la violencia provocada por grupos armados

que actúan al margen del Estado, se incrementará en la medida en que vayan aplicándose los recursos de la privatización de las empresas que manejan el agua, la energía, y en las poblaciones donde se sitúan los bancos biológicos.

La identidad de los tres planes: El Plan Dignidad, El Plan Colombia y El Plan Puebla Panamá

Los tres planes tienen una identidad, fueron elaborados por iniciativa de Estados Unidos, con el soporte de organismos internacionales supeditados a intereses geopolíticos y militares, y asesorados por agentes norteamericanos. Ninguno de los tres planes ha pasado por una etapa de discusión previa en las instancias legislativas, sino que llegó por iniciativa del Ejecutivo y se impuso.

El Plan Colombia reemplazó al inicial Plan de Paz que propuso Andrés Pastrana Arango sin mediar discusión alguna.

Por su naturaleza, el Plan Colombia atenta contra la vida, política, sociedad y leyes de Colombia, dado que su nacimiento fue anticonstitucional, en la medida que reemplazó, sin que el Congreso interviniera, el Plan de Desarrollo previamente aprobado. Lo más insólito fue que el documento del Plan Colombia no se presentó en español, sino en inglés, bajo el asesoramiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y con un argumento lejano a la sociedad; el mayor énfasis está dirigido a combatir una guerra con criterios belicistas; construye unas hipótesis que no concuerdan con la realidad pero sí con la estrategia intervencionista norteamericana, en tanto que induce a que Colombia acepte la existencia de una guerra ligada al narcotráfico, lo cual vulnera la región. De ahí que sea indispensable la combinación de instrumentales de guerra, logística e inteligencia, asesoradas con personal experto norteamericano.

Producto de lo anterior, la inteligencia estratégica del ejército colombiano ha sido reemplazada por un grupo élite de asesores norteamericanos que se han instalado en las

bases militares y desde ahí orientan la guerra contra las fuerzas insurgentes. Se sustentan en una base tecnológica de radares, aviones y telefonía para detectar y dar seguimiento a las incursiones bélicas de los grupos guerrilleros.

La visión geopolítica del Plan Colombia se observa a través de las adecuaciones tecnológicas que se han hecho en varios sitios del país, con el objeto de modernizar la capacidad de acción del ejército colombiano y profesionalizar cuadros en varios puntos del territorio nacional.

Radares y brigadas de acción rápida en Colombia

- Radar de asiento en la Isla de San Andrés.
- Radar de asiento en Riohacha.
- Radar y base terrestre en Marandúa, Vichada.
- Brigada 24 del Ejército en el Putumayo.
- Brigada Oriental del Ejército en Puerto Carreño y el departamento de Vichada.
- Radar y base terrestre en San José del Guaviare y escuela de entrenamiento de Barrancón.
- Brigada del Ejército en Caquetá.
- Base Militar Tres Esquinas, Putumayo.
- Brigada de patrullaje fluvial en Puerto Leguízamo, Putumayo.
- Radar con base terrestre en Leticia, Amazonas.
- Base militar de Tolemaida, en Tolima, con 18 helicópteros HV-1N.

Es digno destacar que algunas de estas brigadas, especialmente las que se encuentran en las cabeceras de los ríos Amazona y Orinoco, realizan pruebas de las fumigaciones que se aplican en Bolivia, Perú y Colombia, bajo el pretexto de erradicar el cultivo de la hoja de coca. Eso ocasiona graves daños en la salud de los habitantes y en otros cultivos de vital importancia para las comunidades, puesto que el glifosato y el hongo fusarium oxysporum tienen efectos nocivos sobre la población.

En su mayoría, estos sitios no están comunicados por vía terrestre con el centro y



resto del país, pero sí vinculados por la urdimbre de la guerra; pero ello no es impedimento para la estrategia del Plan Colombia, porque no fue concebido ni instrumentalizado para un país. Su intención es extensible, regional y tiene un claro interés geopolítico, por ello sus brazos se extienden a otras naciones. De ahí que veamos movimientos en Panamá (266 kilómetros de frontera) en la región donde habitan los indígenas payas y panuza, cerca del Darién y una pista de aterrizaje en Metetí, destinada a la aviación norteamericana y especial para el arribo de aviones Hércules.

Hacia el sur, en Ecuador (586 kilómetros de frontera) se conecta con la Base Manta, ocupada por 5.000 soldados y seis naves P3 de cuatro turbinas, y doce militares estadounidenses, desempeñando labor de espionaje a través de captación de imágenes satelitales, interceptaciones telefónicas y apoyo logístico a los ejércitos de Perú y Colombia para contrarrestar a los narcotraficantes y guerrilleros. A partir del 9 de marzo del 2002, se congregaron grupos militares en retenes permanentes y acordonamiento desde la base Militar Ciro Alegría hasta El Milagro en Bagua, frontera con Colombia; desde Caballococha hasta Inquitos y Pijuyal, cercando toda la parte amazónica.

En Perú (1.625 kilómetros de frontera con Colombia) en varios puntos fronterizos se encuentran en movilización permanente cerca de 2.000 militares; sin embargo, en la frontera con Brasil (1.645 kilómetros) la colaboración no es estrecha entre los dos gobiernos. Esto se debe a que Fernando Enrique Cardoso se resiste a involucrarse en el conflicto y prefiere patrullar y vigilar de manera independiente las ciudades norteñas de Tabatinga y San Gabriel, a través del Sistema de Vigilancia Amazónica (SIVAM) y la base militar recién establecida en la zona descrita, la cual se suma a las bases aéreas de Boa Vista (Roraima) y Manaus (Amazonas).

Respecto a Venezuela (2.219 kilómetros de frontera), el Plan Colombia ha tenido serias dificultades para extenderse hacia ese país, porque el comportamiento y posición de Hugo Chávez confronta con la visión militar de los

guerrilleros norteamericanos y colombianos. A este factor ideológico, se le suma el interés económico estratégico que existe entre Brasil y Venezuela a partir del acuerdo que permitió tender 676 kilómetros de cables que transportan energía de 200 megavatios hora de Guri a Roraima; lo que aportará a Venezuela nueve millones de dólares anuales por venta, y 800.000 más por costo de operación. Dicho acuerdo se firmó con una vigencia hasta el año 2020.

No obstante, el interés de la administración Bush sigue vigente porque tanto Colombia como Venezuela son países que tienen frontera con la costa caribeña y la zona andina, y en esa región existe gas en abundancia que llama la atención de diversas empresas norteamericanas. Asimismo, el factor Chávez propicia una situación incómoda por el triunfo de Lula en Brasil y el potencial subversivo de los indios en Ecuador; además, Venezuela es un suministrador de petróleo seguro que puede aliviar la economía norteamericana en una eventual guerra con Irak y ante la vulnerabilidad de Arabia Saudita.

Con base a lo anterior, es entendible que la convulsión que vive Venezuela en la segunda mitad del año 2002 no es un hecho fortuito, sino parte del cometido del Plan Colombia que trata de extender sus tentáculos hasta el territorio bolivariano, acompañando a los empresarios, militares y al *pool* de medios de comunicación para que generen una situación de caos con el fin de que renuncie Chávez o adelante las elecciones, lo cual configuraría un mejor cuadro político para las aspiraciones de los estrategas de la administración Bush.

Los soportes financieros y los ganadores de los planes

La esfera bélica de los planes en ejecución es el verdadero negocio de la guerra: detrás de cada incursión de carácter militar hay una empresa y un grupo de inversionistas que se lucran con el dolor de los pueblos latinoamericanos. El soporte militar está dividido en dos aspectos, los que proporcionan el equipo de software y el hardware. Veámoslo:

	EMPRESAS INVOLUCRADAS	ESPECIALIDAD	CARACTERÍSTICA
EQUIPO SOFTWARE	Military Professional Resources Inc. (MPRI)	Entrenamiento policial y capacitación de tropas. Fundada por militares retirados de los EE.UU.	Cobran en Colombia 635 millones por su participación en la fumigación, entrenamiento contrainsurgente en Perú y Colombia, y son los encargados de transferir el <i>know how</i> del terrorismo de estado para combatir a las FARC y al ELN
	DynCorp	Entrenamiento policial y capacitación de tropas. Ingresos anuales por 1.200 millones de dólares. Fundada por militares retirados de los EE.UU.	
EQUIPO HARDWARE	Lockheed Martín	Sistema de radar para mejorar tareas de aviación P-3 AEW / Radares APS-138 y actualizarlos en APS45.	Costo: 68 millones de dólares
	Ayres Corporation	Optimizar en OV11 los aparatos OV10 de la Fuerza Aérea colombiana y modernizar los programa de Interdicción Aircraft, A37, OV10 y Tucan.	Facturaron 54.5 millones de dólares, de los cuales 20 fueron para adquirir una nave AyreS2r T-65 para la dispersión de herbicidas y a la vez sirve para actuar en una guerra química con defoliantes
	Bell Helicopter Textron	Facilitará 42 Helicópteros Huey II equipados con un motor T53, para uso policial y militar	A cambio de 75.6 millones de dólares.
	United Technologies Corporation, Sikorsky Aircraft	Vendieron: 18 helicópteros Blackhawk, 5 helicópteros K-Max y su respectivo mantenimiento por cuatro años proporcionado por Kaman Aerospace Corporation	Facturaron 234 millones de dólares
	Northrop Grumman Corporation	Aporta un avión NOC/RC-7 de reconocimiento aéreo (ARL-M)	A cambio de 30 millones de dólares
	Schweizer Aircraft Corporation	Vendió un avión de alta tecnología con sensores infrarrojos Schweizer SA 2-37 equipado	
	Dupont, Monsanto y Agricultural Biological Control (Ag/Bio.Con)	Facturan los herbicidas para fumigar plantíos de coca	Monto transado: desconocido

Las cifras indican que la guerra también es un negocio próspero, principalmente para Estados Unidos y, en particular, para las empresas asociadas con la producción, asesoría y mantenimiento de dispositivos bélicos. Por ello, cada aplauso, defensa, consentimiento o aprobación que hagamos del Plan Colombia, Plan Dignidad y Plan Puebla Panamá es una pequeña, pero significativa ayuda para que las empresas vinculadas al exterminio, a la paz sepulcral, sigan posesionándose del cuerpo de nuestros pueblos latinoamericanos.

El eje estratégico de los planes

El Plan Colombia se conecta con el Plan Dignidad, que funcionó desde abril de 1998 hasta 2001. Destinado a erradicar los cultivos de coca en la región del Chapare fue prolongándose sin mediar justificación alguna, lo que hace presumir que se alargará otros años más.

En teoría, el Plan Dignidad intenta organizar una lucha contra el narcotráfico, sustentada en

cuatro pilares: erradicación, interdicción, desarrollo alternativo y prevención; sin embargo, tras él, se encuentra está el plan militar y terrorista que se ha venido desarrollando en el país boliviano desde hace varios años, recrudescido en los últimos meses con el nacimiento del Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene como figura principal al cocalero Evo Morales, quien se opone férreamente al plan anticoca.

Desde los primeros días del mes de abril de 1998 hasta agosto de 2002, los habitantes de Amayapampa, Capasirca, Llallagua y el Chapare (Bolivia) han vivido un verdadero estado de sitio, en un claro proceso de militarización de la región. Cientos de efectivos policiales y militares han invadido violentamente las tierras del Chapare, cometiendo un sinnúmero de abusos y asesinatos que atentan contra los más elementales derechos y libertades individuales.

La intención de erradicar el cultivo de la hoja de coca y remplazarla por cultivos alternativos es la falacia que se maneja ante la opinión



pública: en la práctica ha sido ineficiente y distorsionada. Las comunidades que han aceptado el programa oficial se han quedado con la ayuda a medias, los productos del achote y la piña que han obtenido del cultivo no se pueden comercializar por falta de vías de comunicación, los mercados no son receptivos para ese tipo de producto, los microcréditos no fluyen, las fumigaciones dañan la salud y matan a los animales domésticos; lo cual irrita a los habitantes de esas comunidades, quienes vuelven a sembrar la coca como un retorno a las prácticas tradicionales.

Si estudiamos lo que dice el Plan Dignidad, no se diferencia del Plan Colombia ni del Plan Puebla Panamá y los tres se vinculan con la estrategia que elaboró Estados Unidos para el hemisferio sur.

El eje de los tres planes (Dignidad, Colombia y Puebla Panamá) está constituido por los siguientes conceptos Democracia, reducción pobreza, esfuerzos antidrogas, consecuencias ambientales del narcotráfico y apoyo a Estados Unidos en su lucha antiterrorista. De ahí que en los tres documentos haya un énfasis por “fortalecer las democracias frágiles, luchar contra la pobreza y mejorar la cooperación regional contra el tráfico de drogas”. Aunque no dicen cómo se instrumentaría la estrategia en cada uno de esos aspectos, sí se nota un fuerte incremento de “paramilitarismo” en las tres regiones, básicamente en Colombia con la Administración Uribe, que ha incorporado a la población civil campesina y marginal popular en las labores de contrainsurgencia, fomentando el paramilitarismo disfrazado. De igual forma, se evidencia la tendencia al alza de grupos civiles armados que atacan permanentemente a los municipios libres y a los dirigentes zapatistas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, México; en Bolivia la represión ha crecido a partir de la fuerza que ha mostrado el MAS después de las elecciones de este año.

La propuesta Bush no es distinta a la que predominó con la Iniciativa Regional Andina (ARI) que se presentó a los reporteros el 16 de mayo de 2001, en una sesión informativa en el Departamento de Estado. El enfoque del

presidente Bush en relación con las dificultades sociales y económicas más urgentes de los Andes se basa en la admisión de que “todos estos problemas persistentes están relacionados entre sí” y “ninguno... puede atenderse por separado”. Esto denota una persistencia de ligar todos los problemas al narcotráfico, lo que facilita el intervencionismo militar bajo el manto de la lucha contra la siembra ilícita, pero en el fondo busca contrarrestar los brotes de insumisión que están brotando en el agro de los países latinoamericanos, en especial los que se encuentran dentro de los tres planes.

La iniciativa de los planes, en teoría, promueve el crecimiento económico a largo plazo, pero dentro del marco del modelo neoliberal y el libre comercio, lo que nos da a entender que por el poco tiempo que tienen los planes, menos de diez años, los efectos no llegarán pronto. Respecto a lo de apuntalar las instituciones democráticas y apoyar medidas de las naciones anfitrionas para combatir la corrupción, reformar los sistemas judiciales y adoptar políticas fiscales sólidas, todo indica que debe darse una reforma profunda del Estado, pero no es así. De lo que se trata es de ir marginando a los partidos políticos de los debates sobre los asuntos económicos, dado que los acuerdos en este ámbito se dan fuera del país y con actores externos. La idea es ir minando la credibilidad de los partidos políticos en la medida que no participan ni deciden sobre los asuntos estratégicos de la nación, tales como reforma al sector eléctrico, apertura de los mercados, acuerdos bilaterales o regionales de comercio, privatización de recursos nacionales, endeudamiento con los organismos financieros internacionales, etcétera. Además, estos planes ponen de relieve el papel del comercio liberalizado como estímulo económico y aboga por la renovación de legislación tal como la Ley de Preferencia Comercial Andina a fin de que estén en el mismo marco que la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que se pondrá en ejecución en el 2005.

Dentro del ALCA hay un recurso de gran interés para Estados Unidos: el gas boliviano, por lo cual se han iniciado los trámites correspondientes para limar las asperezas diplomáticas

entre Bolivia y Chile, e interconectar las plantas bolivianas con el norte chileno (Arica y Iquique); zona que ha subsistido sin apoyo ni inversiones en los últimos años. Se anuncian resultados de una inversión inicial de 1.900 millones de dólares de un total de 6.000 millones para financiar el gasoducto y las exportaciones del fluido hacia suelo norteamericano.

La intención de promover la democracia liberal en Bolivia, Colombia y la zona del sur de México hasta Panamá, además de los intereses económicos y recursos naturales públicos, es la de marginar toda iniciativa política que nazca de las comunidades indígenas y/o populares. Estas últimas no se encuentran institucionalizadas como partidos políticos; lo que afectaría el fortalecimiento de las democracias nacientes y las instituciones vigentes.

Como se puede observar, la estrategia de los tres planes no está orientada a respaldar la nueva democracia que se está dibujando en América Latina, tampoco a estimular la participación política de los nuevos actores, sino que tiene una definición clara: fomentar el paramilitarismo para contrarrestar el auge de las protestas que se deriven de la exclusión y privatización de los servicios públicos, en especial el agua y la energía; detener por medio de la represión, no estatal, pero sí paramilitar, los levantamientos de los actores insumisos que se revelan en el campo y en los sectores marginales de las ciudades. También pretende reemplazar la ineficacia de los gobiernos, los partidos políticos y del modelo imperante para generar empleos mediante agremiaciones que doten de un oficio a los habitantes de las zonas conflictivas en labores de espionaje contrainsurgente, hasta que las personas terminen convertidos en felones sociales.

Plan Puebla Panamá (PPP)

Aparece como una parte o complemento del Plan Nacional de Desarrollo en México, pero involucrando a la región centroamericana y al istmo de Panamá; lo cual le da un carácter internacional.

Su objetivo visible es ser facilitador y gestor para la inversión externa y privada y así contener

los flujos migratorios hacia Estados Unidos. A su vez, pretende abrir las puertas para la privatización de los recursos públicos, principalmente las empresas que suministran agua, energía y telefonía en el área.

Es digno de señalar que en la amplia región que abarca el PPP entre el estado de Puebla y el territorio panameño se encuentra el banco biogenético más significativo. Se trata de un espacio que cuenta con grandes yacimientos y producción de petróleo en México, El Petén, y reservas potenciales en Nicaragua y Costa Rica; maderas abundantes y finas, recursos de agua abundante, la tierra es muy rica y fértil y sirve para la agricultura y ganadería. Está habitada por población indígena y campesina.

La riqueza de los recursos ha despertado el interés en las empresas transnacionales, pero quieren esas tierras limpias de gente, principalmente de los inconformes o de los que cuentan con recursos orgánico-movilizador para contrarrestar las futuras inversiones.

He aquí el primer reto del PPP, cómo instrumentar una estrategia de limpieza social para fomentar las inversiones. Para conseguirlo, ha promovido varios proyectos para de obligar a cientos de miles de pobladores a abandonar su tierra de manera pacífica, promoviendo la siembra de cultivos de la palma africana, vainilla, flores, entre otros, que acaban ahogando la economía campesina por falta o distorsión provocada de mercado. Existe la estrategia radical que busca, bajo toda circunstancia, promover el paramilitarismo en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua para sofocar los conflictos que se engendren y garantizar una situación de estabilidad política, caracterizada por el miedo y el terror que, de ser persistentes en amplios sectores sociales, puede desembocar en fobias, timidez, bajo grado asociativo y desconfianza en el otro.

Ahora bien, si miramos los debates más recientes en las naciones que integran el PPP, la temática gubernamental gira en torno a la apertura de los sectores de la electricidad, petroquímica, agua y telefonía. Existe interés



por construir 72 presas hidroeléctricas, 22 en Chiapas, las cuales se deben edificar con soporte de inversión privada.

Otro aspecto relevante es la deficiencia energética de Estados Unidos; situación preocupante para la administración Bush, que ha destacado la necesidad de *norteamericanizar* los mercados de energía. En los compromisos que asumió en Québec afirmó que “el precio del petróleo puede incentivar a las compañías norteamericanas a realizar labores de exploración en ambos lados de nuestra frontera; hay mucho trabajo para hacer juntos”, dijo el mandatario. Y agregó: “Si los proveedores canadienses y mexicanos de petróleo y electricidad están buscando un mercado, ya lo encontraron en Estados Unidos. Tenemos una deficiencia energética, requerimos más energía en nuestro país”, respondió el presidente Bush cuando fue interrogado en una conferencia de prensa sobre la iniciativa de crear un mercado continental de energía, contenida en el ALCA.

“Lo que puede hacer Estados Unidos es proporcionar mercados con mejores oleoductos, otorgando permisos transfronterizos, recibiendo los abastos de gas natural sin importar su país de origen”, estableció el mandatario norteamericano. En particular, dijo que su país puede trabajar “con nuestros amigos de México” en el desarrollo de proyectos de electricidad en la zona fronteriza común.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿quién garantiza la inversión en una región vulnerada por la violencia, donde la mayoría de los conflictos se han dirimido a través del de la confrontación, provocando una cultura contestataria ante el vacío de autoridad legal y la proveniencia de enclaves autoritarios, que han desplazado la posibilidad de arreglos mediados por la legalidad?

El vacío institucional y la ilegitimidad de las autoridades en muchos lugares donde se piensa instaurar el PPP no garantizan resolver las diferencias a través del marco normativo de un estado de derecho. Este hecho va a desatar innumerables conflictos armados y desplazamientos de numerosas familias, por lo que se

avercinan dos fenómenos con características novedosas: desplazamiento migratorio interno por la confrontación paramilitar contra comunidades campesinas, y desgarramientos internos por familiares que se incorporen en las labores de fisgón en zonas de conflicto.

El PPP envuelve a Panamá

Las cifras oficiales y las que se manejan en las investigaciones regionales indican que la economía panameña resiente una crisis económica que se agudiza, producto de los vaivenes de la economía mundial y del perfil económico del istmo, cuya característica principal es el comercio. Además, Estados Unidos ha desatado muy sutilmente una ofensiva contra ese país, presionándolo para que negocie un acuerdo de “fuerzas visitantes”, que permitan a los militares de Estados Unidos utilizar abiertamente Panamá como base de operaciones.

Aunado a lo anterior, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos cerró las pinzas y sancionó a Panamá rebajando a su aviación a categoría dos; lo que se traduciría en un desastre comercial para las empresas panameñas que no podrían volar a territorio estadounidense y tendrían que utilizar conexiones con aerolíneas que sí puedan entrar a él. La “sanción” ha sido apelada por las autoridades panameñas, debido a que la medida ha sido sorpresiva, inconsulta y represiva; pero todo conduce a doblegar la actitud pasiva del gobierno de Mireya Moscoso ante la petición de colaboración solicitada por Estados Unidos, para que coadyuve en la aplicación del Plan Colombia -principalmente en la zona del Darién-territorio por el que se desplazan grupos insurgentes colombianos.

Las presiones contra Panamá llevan a la Administración Moscoso a aceptar el PPP, pero no tanto en su versión de libre comercio y apertura de mercados, porque eso ya acontece en el país desde hace muchos años: Panamá fue el primer Estado latinoamericano que vivió directamente la globalización, su enclave estratégico lo ha convertido en la nación de América Latina más vinculada al comercio

internacional. Lo que le interesa a Estados Unidos y donde Panamá se siente más incómodo son los asuntos militares que trae el PPP, pero velados por la lucha antinarcoóticos. Unas de las medidas que se han aplicado son las imposiciones de medidas bancarias y restricciones financieras, supuestamente lavado antinarco, pero que en el fondo agravan la crisis económica y ponen en compromiso las finanzas del país. Por ello, tienen que acudir a los “buenos” oficios de su embajada ante el Departamento de Estado norteamericano, para que oxigene las presiones a cambio de acuerdos político-militares.

Tales acciones buscan imponer al país una mayor y más activa participación en el Plan Colombia y la guerra que se libra en ese país vecino. Aunque la embajada norteamericana haya negado todo interés en reabrir una base militar en suelo panameño, existen fuertes indicios y pruebas de ello: las pistas en Matetí y los movimientos en la zona del Darién hablan de todo lo contrario.

Los acuerdos en Panamá

El gobierno nacional firmó -sin publicar ni presentarlo a la Asamblea Legislativa- un acuerdo negociado en secreto con el gobierno de Estados Unidos de América, llamado Arreglo Complementario 2002; cuyo propósito es una ampliación del arreglo de 1991, que tampoco fue presentado ante la Asamblea ni analizado públicamente y menoscababa los intereses panameños. El Arreglo Complementario 2002 permite sobrevolar sin control por todo el país a los aviones militares norteamericanos y el abordaje de sus soldados en barcos de bandera panameña y de otras naciones en alta mar, al igual que en aguas panameñas.

Otro acuerdo que se firmó entre Estados Unidos y el gobierno anterior a Moscoso (Pérez Balladares) bajo el secretismo que se utiliza en la política panameña, fue el de establecer un Centro Multilateral Antidrogas (CMA), cuyo fin era contener el tráfico de drogas hacia Norteamérica, que buscaba bajo toda circunstancia entregar la conducción de esta política al personal de la DEA (*Drug Enforcement*

Administration). La agencia norteamericana ha sido cuestionada por el poco éxito en la lucha contra las drogas, pues la efectividad del rastreo de naves aéreas o marítimas es relativa; ya que el narcotráfico utiliza otras vías terrestres y marítimas, aprovechando la liberalización del comercio. Además, la solución no está en la militarización de esa lucha, sino en la restricción de la demanda y en otras formas de restringir la oferta.

Mobilización militar en Nicaragua

Este país centroamericano tiene una particular percepción sobre los militares norteamericanos, construida a partir de la guerra que vivió durante 10 años de la administración sandinista. No obstante, ante la necesidad de ir sensibilizar a la población para que sea receptiva a este tipo de movilizaciones y desplazamientos militares, la embajada norteamericana en Nicaragua ha cerrado acuerdos con la Administración de Arnoldo Alemán y la recién instalada de Bolaños para que contingentes militares visiten el país y desarrollen labores comunitarias. El propósito: que los campesinos vean en los soldados extranjeros un depositario de sus confianzas, toda vez que les están resolviendo problemas y necesidades que han demandado desde hace años.

Es conocido en el ámbito de los académicos y especialistas en asuntos de guerra y conflictos, que en Centroamérica las zonas más violentas son las rurales: por vivir en un entorno vacío de estructuras institucionales y carente de leyes que posibiliten arreglos al margen de la confrontación. Este déficit ha disuelto las fuerzas contestatarias y los impulsos emocionales hasta colocarlos en un plano donde se resuelven los conflictos de manera directa, confrontativa y muchas veces aplicando la justicia por su propia mano. Indudablemente esta situación no es la óptima para las pretensiones de los inversores que están tras del PPP; además, los ímpetus y emociones pueden ser redireccionados y atacar, en algún momento, a los representantes de las empresas que tienen interés en aplicar sus recursos en el área; lo que pondría en riesgos las inversiones o las expropiaciones de tierras a los campesinos.



Ante este riesgo, los agentes norteamericanos han puesto en marcha el plan de visita comunitaria con 4.000 militares de Estados Unidos para que ingresen al país, con el compromiso público de construir escuelas, centros de salud y proporcionar asistencia médica gratuita a las comunidades marginadas del campo.

A fin de que el plan vaya a la par de los cabildeos del PPP, la Asamblea Nacional autorizó el ingreso escalonado al territorio nacional de un contingente de 3.665 efectivos militares y personal médico de Estados Unidos, quienes atenderán e irán a las poblaciones de los municipios de Juigalpa, Santo Tomás y Bluefields; coordinando sus acciones con el alto mando del ejército de Nicaragua.

El decreto estableció que el primer contingente de quince efectivos ingresó al país entre el 23 de abril y el dos de mayo de 2001. Un segundo grupo de cincuenta efectivos permanecería en Bluefields del 21 al 29 de mayo, y un tercero, que de 3.600 militares, programaría su arribo el 12 de diciembre y partiría hacia Estados Unidos el 30 de junio del año 2002, con una rotación de 300 efectivos cada quince días hasta completar la totalidad.

Los boletines de prensa que han circulado en torno a este acontecimiento consignan que se programó la visita de 25 doctores militares que se desplazaron por Bluefields, con visitas de dos semanas, atendiendo a 5.000 nicaragüenses con consulta y medicina gratis. Fue un tipo de servicio comunitario que les permitió conocer cómo se comporta y cuáles son las necesidades del pueblo, aspectos fundamentales para realizar un trabajo en el futuro.

Paramilitarismo en Guatemala

La práctica paramilitar en Guatemala data desde 1981, cuando el gobierno de Romeo Lucas García organizó las “Patrullas de Autodefensa Civil” (PAC), cuyo objetivo era aniquilar las comunidades indígenas y campesinas que brindaran apoyo a las fuerzas insurgentes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)

Con la firma de los Acuerdos de Paz (29 de diciembre de 1996), las PAC fueron disueltas. El Gobierno no les reconoció ningún estatus de cuerpo institucional, por lo que no fue depositaria de ningún beneficio compensatorio (jubilaciones o pensiones de guerra), viéndose forzados a retornar a sus lugares de origen, las fincas o poblados rurales. Con el arribo del presidente Alfonso Portillo en el año 2000, respaldado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), las PAC se reactivaron con paros y bloqueos para forzar al mandatario de turno a negociar y obtener un apoyo económico de 20 mil quetzales por persona (2.500 dólares). Lo lograron apoyados por la gestión del general retirado Efraín Ríos Montt, que hoy preside la mayoría del Congreso de ese país. La relación de las PAC con el FRG y Ríos Montt es pública y de intereses fácticos de poder; por ello, de cara a las elecciones y el negocio que ofrece el PPP, las PAC han revestido su acción y -al amparo del gobierno- reactivaron su comportamiento paramilitar en Petén, Mazatenango, Alta Verapaz y Huehuetenango, actuando en conjunto con la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), organización conservadora de ex soldados y patrulleros.

Desde 1999 a la fecha, las actuaciones paramilitares se han incrementando, expropiando terrenos, secuestrando a campesinos y líderes comunitarios, quemando ranchos, robando animales y ajusticiando a los delatores y querellantes que se han atrevido a entablar juicios contra los atropellos militares.

No sólo actúan en Guatemala, los brazos del sicariato llegan hasta Chiapas, México, donde ofrecen sus servicios a propietarios de fincas de café y ganaderos para confrontar a los simpatizantes del EZLN.

Los puentes del Plan Colombia con el PPP

En Colombia se ha iniciado un proceso de privatización acelerado en 13 electrificadoras, donde el Estado era el accionista mayoritario. Los pretextos que se esgrimen son las dificultades de inversión del gobierno, la demanda creciente de energía por parte de la

población, los atentados en las torres de conducción de energía que ha ocasionado la guerrilla y el interés de empresas norteamericanas por invertir en el país. Este último punto es curioso, porque mientras la prensa desacredita los destinos turísticos colombianos por el alto grado de inseguridad y la ola de secuestros, se presiona por la vía diplomática para atraer inversiones.

Las compañías en venta, en la Fase Uno, y que han sido objeto de inversión foránea se encuentran ubicadas en la zona centro y centro sur de Colombia, lugares donde se dirime el conflicto y son la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec), Empresa de Energía de Cundinamarca y las electrificadoras del Quindío, Huila, Meta y Caquetá.

La Segunda Fase se concentrará en la capitalización de las centrales Eléctrica de Norte de Santander, Electrificadora de Santander, Centrales Eléctricas de Nariño y Electrificadora de Cauca.

Lo relevante en este proceso de privatización es que la Fase Uno se encuentra ligada con la Zona de Distensión en la administración Pastrana, creada el 7 de noviembre de 1998; lo cual fue un elemento determinante para que se rompieran las negociaciones los días 20 y 21 de febrero de 2002.

En esta zona se encuentra la Base Militar de Tolomaida, colindando con Cundinamarca, conformada por tres brigadas móviles de 1.200 hombres armados; en Neiva, capital del Huila, está la XII Brigada del Ejército con 3.000 soldados, fuerzas especiales y una flotilla de tanques "Cascabel". A estas fortalezas militares se les agregan los corredores estratégicos de Florencia con 2.000 soldados, la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur en el Putumayo con 5.000 personas y la Séptima Brigada, con sede en Villavicencio.

La Fase Dos contempla los Departamentos de Santander, Santander del Norte, Nariño y Cauca, zona oriental y sur occidental de Colombia, respaldada militarmente por la colindancia con Ecuador y sede de la Base Militar Manta.

El armamento que se utiliza en cada acción bélica varía, pero el arsenal tiene un repertorio amplio, desde lanchas *Piraña*, helicópteros *Black Hawk* y *Arpía*, aviones Hércules y C-130, OV-10 y Avión Plataforma.

Como podemos ver, las privatizaciones en el ramo eléctrico no tienen riesgo porque se encuentran resguardadas por el ejército nacional, las acciones del gobierno de Álvaro Uribe y por la recién creada Red de Informantes, que son paramilitares oficializados. La pregunta que asalta la razón es ¿seguirá marcando esta tendencia la instrumentación del Plan Puebla Panamá?

¿Se convertirá la Red de Informantes en un recurso político para aplicarse en las zonas donde nazca el conflicto por la ola de privatizaciones y expropiaciones de tierra? ¿Se *acuerparán* los campesinos desplazados y expropiados de sus tierras en un ejército de informantes para facilitar las tareas de los paramilitares? ¿Ante la escasez de empleo, será la Red de Informantes una oportunidad para obtener un salario? ¿Seguirán organizándose ejércitos paramilitares para actuar donde el Estado no quiere comprometerse?

Éstas son preguntas de investigación que han comenzado a tener respuesta por los acontecimientos en Chiapas, Guatemala y El Salvador. Por otro lado, se observa una debilitación de la sociedad civil colombiana frente a un incremento de la sociedad política, en la medida que se está incorporando a un grueso de la población en acciones militares. Aunado a ello, está el llamado que hace a los 20.000 miembros retirados de la policía y a los reservistas menores de 45 años para que coadyuven en las tareas del Estado, con el propósito de combatir a los insurgentes armados.

El futuro de la región, dado el soporte que brindan los datos, es incierto, cargado de temor, lleno de violencia y desgarramientos en el interior de la sociedad civil. No se asoma por lo pronto un hálito de esperanza para los colombianos que desde hace años esperan el tranvía de la paz.



Recursos militares del PPP

El Salvador. Base permanente de inteligencia y de monitoreo en la embajada norteamericana de San Salvador; es más grande que la de los demás países de América Latina.

El Plan Nuevos Horizontes de Estados Unidos para realizar ejercicios conjuntos de fuerza de tarea con el ejército de Guatemala en la región de El Petén, desde febrero-mayo del año 2000, frontera de México; este programa ya se ha realizado en El Salvador, donde participó Guatemala también.

La misión de Nuevos Horizontes es estrictamente de entrenamiento y de “apoyo” humanitario. No son operaciones antinarcóticos, pero sí una combinación cívico-militar. El ejercicio realizado en Chalatenango fue dirigido por el coronel Clayde Leavelle, quien en 1990 estuvo en Arabia Saudita en la “Operación Tormenta del Desierto” y se desempeñó como oficial ejecutivo de batallón. El coronel Leavelle es especialista en artillería, defensa aérea, paracaidismo y combate aéreo de fuerza rápida.

En El Salvador la operación cívico militar se denominó *Fuerza de Tarea Conjunta Santa Fe*, en el contexto de Nuevos Horizontes 2000 y de penetración comunitaria. Para ello se construyeron dos cocinas, una clínica; se perforaron diez pozos y se rehabilitaron caminos; se atendieron en consulta a 30.000 personas y 10.000 animales.

Para el ejercicio del año 2001, ya realizado, se eligió El Petén como lugar idóneo. Los proyectos planificados fueron:

Construcción de una escuela y un pozo en Yaxal y El Porvenir; escuela en Redentor, El Arrozal y Morales; pozos en Zocotzal, Panorama y La Granja, y asistencia médica en Las Cruces, Rancho Alegre, La Libertad, El Chal, Dolores, La Máquina, El Zapote y El Remate.

En las fronteras de Honduras con Nicaragua, previo a las elecciones de noviembre de 2001 y ante una contingencia que diera el triunfo al

FSLN, se activaron los grupos paramilitares desde finales de julio del presente año. Dichos grupos estaban formados por exmilitares y expolicías que se han aglutinado alrededor de unos “Comités de Defensa Cívicos”. Funcionan como factor coadyuvante de los cuerpos oficiales.

Actúan en zonas fronterizas con Nicaragua, cuentan con entrenamiento militar y desarrollan labores como autoridades; no hay que olvidar que la base militar de la época de los “contra” aún existe: *Palmerola*.

Se agregan a Palmerola las bases militares de San Pedro Sula, Cucyagua, Tegucigalpa, San Lorenzo, La Ceiba, Trujillo, Puerto Lempira y Dursuna. Está por construirse la base militar en Los Cayos Miskitos, en el litoral norte.

El armamento de los militares hondureños

Armamento: 40 aviones de combate, no helicópteros armados. Aviones caza de ataque a superficie: 2 escuadrones: 1 con 13 aviones Cessna A-37B Dragonfly. 1 con 10 aviones Northrop F-5E Tiger II, y 2 F-5F Tiger II. Aviones de caza: 8 aviones Dassault Super Mystere B2. Aviones de transporte: 5 aviones Douglas C-47, 1 Lockheed C-130A Hércules, 1 Lockheed L-188 Electra, 2 IAI-201 Arava y 2 IAI-1124 Westwind. Aviones de enlace: 1 escuadrón con 1 avión Barón, 3 Cessna 172, 2 Cessna 180, 2 Cessna 185, 3 Rockwell 114 Commander, 3 Piper PA-31-235 Navajo y 1 Piper PA-34 Seneca. Helicópteros: 9 Bell 412P, 3 McDonnell Douglas Hughes 500D, 5 McDonnell Douglas Hughes TH-55, 13 Bell UH-1B/H (6 1B y 7 1H) Iroquois y 1 Sikorsky S-76 Spirit (VIP). Aviones de entrenamiento: 4 aviones CASA C-101 BB-03 Aviojet, 6 Cessna U-17A, 11 Embraer Av EMB-312 Tucano y 5 Cessna T-41A Mescalero.

En la frontera Guatemala-México, el desplazamiento de los kaibiles guatemaltecos, desechados por el ejército de ese país por los Acuerdos de Paz, se ha dado hacia el estado de Chiapas a lo largo de la franja fronteriza de Las Margaritas y La Trinitaria. Según testimonios recogidos, se emplean como fuerza paramilitar de los ganaderos y cafetaleros de la zona sin que sean divisados por la base militar del ejército mexicano de Amparo y Aguatinta;

además, actúan como agentes amedrentadores en los municipios autónomos de Tierra y Libertad.

Lo que preocupa a los inversores del PPP

El PPP, por sus recursos petroleros y el potencial eléctrico, es un bocado apetecido por las corporaciones multinacionales, toda vez que han decidido innovar en el área de los nuevos negocios la fusión entre petróleo y sector eléctrico, conocido como “petroeléctrica”.

La nueva industria petroeléctrica que se pretende constituir en la región del PPP busca el retiro del Estado de esas áreas estratégicas, a fin de que los inversores extranjeros puedan ampliar las redes de producción y distribución de gas, petróleo y privatización de las compañías generadora de electricidad. Esto redundaría en una mayor acumulación de capital y jugosas ganancias. No obstante, hay nubarrones por despejar para que el proyecto se instale en la zona.

Una de las preocupaciones -que tienen que resolver los Estados de cada país incluido en el PPP- es saber distribuir la población de 27.5 millones de habitantes: sólo 35% está en posibilidad de ser incorporada en los programas de envergadura; 65% restante sería población residual. No obstante, la privatización de los servicios públicos (agua, energía, alcantarillado, carreteras...) afectaría a toda la población. A ello habría que sumarle el déficit de infraestructura en servicios de salud, vivienda, educación, vías de comunicación, y agua potable; lo que se convierte en una potencial bomba de tiempo para que estallen conflictos sociales.

Otro factor inquietante es que los gobiernos y partidos políticos centroamericanos han construido su poder y áreas de influencia a través de una política de concesión, paternalismo y corporativismo que les ha aportado beneficios en un corto plazo: Pero el PPP tiene contemplado una limitación del papel de los gobiernos centroamericanos para que no sean protagonistas de primera línea, sino de interlocutores de mediación. Las grandes decisiones estarán así en los organismos financieros, los empresarios y el gobierno

norteamericano. Todo ello abre una interrogante mayúscula: ¿cuál será el desempeño político de los líderes políticos centroamericanos cuando se vean marginados de los grandes negocios y con un perfil bajo en la política?

La reorganización de los ejércitos y las policías nacionales en Nicaragua, El Salvador y Guatemala pasó por un grado de dificultad en las negociaciones por la paz. Se dieron concesiones a los grupos armados en algunos casos, y en otros se abrieron espacios en la policía privada o bancaria para que se enrolaran, sin que esto haya solucionado las diferencias que existen. Ahora se pretende agregar una policía regional que ataque los problemas de narcotráfico, tráfico de indocumentados y del terrorismo, pero bajo una coordinación de élite con agencias especiales de Estados Unidos, entre ellas la DEA y los encargados de la política hemisférica del Departamento de Estado. ¿Se podrá trabajar en conjunto conociendo la red y tráfico de influencia y corrupción que existe entre ellos?

Otra asignatura pendiente es de qué forma se va a asegurar militarmente la custodia de la potencial conectividad eléctrica en la región. Este punto lleva al proyecto de inversión de empresas transnacionales dispuestas a invertir en el mercado de generación eléctrica y que, sin duda, llevará a la privatización de los últimos activos públicos como son las plantas geotérmicas e hidroeléctricas.

Por último, la construcción de carreteras y puentes podría ser beneficiosa para los consumidores y comunidades en algunos casos; en otros se lesionarán intereses comunitarios; aunque ello no es automático. Se requerirá mucha negociación ante las presiones y movilizaciones sociales, sin violentar el marco jurídico e institucional; lo cual no ocurrirá si nos atenemos a la experiencia de San Salvador Atenco, donde el conflicto estuvo de por medio para detener la expropiación irracional que pretendía el gobierno mexicano, vulnerando todos los derechos de una comunidad.

Así se muestra el PPP, complejo, conflictivo y militarizado, pero con grandes ganancias para



las empresas inversoras, aunque el dinero que brote de esas nuevas empresas estará teñido de sangre campesina, de desgarramientos comunitarios y de violencia en muchos lugares de la región.

Bibliografía

LAVIN, Joaquín (2002), “Quiere el gas boliviano, pero elude hablar del mar”, entrevista realizada por Hugo Moldiz Mercado en revista *Cosas*, edición internacional, 10 de julio, Bolivia, 20-22 pp.

SALAZAR, Robinson (1998), “El escenario para la paz en Colombia y México”, en *Revista Theorethikos*, núm. 06, año 1. <http://www.ufg.edu/therethikos/robinson.html>

SALAZAR, Robinson (1998), “El sentido de la negociación por la paz en Colombia”, en *Revista Thema*, núm. 3. <http://www.colombia-thema.org/sep98/robinson-negociacion.htm>

SALAZAR, Robinson (1999), “El Imaginario comprado: un acto de desesperación de los paramilitares”, en *Revista Theorethikos*, núm. 09, año II. <http://www.ufg.edu/theorethikos/reflexiones5.html>

SALAZAR, Robinson (2000), “La Militarización en Colombia”, Ponencia en el X Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, Morelia, Michoacán.

SALAZAR, Robinson (2000), “Actores imaginarios o imaginarios sin actores en la guerra de Colombia”, en *Revista Espiral*, enero-abril, vol. VI, Universidad de Guadalajara, 15-48 pp.

SALAZAR, Robinson (2001), “Conflicto y violencia en América Latina”, en *Revista Reflexión Política*, núm. 6, año 3, Bucaramanga, Colombia: Universidad Autónoma de Bucaramanga, 23-37 pp.

SALAZAR, Robinson (2001), “El Plan Colombia: Diáspora del conflicto en la región”, Ponencia en el XI Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, Villahermosa, Tabasco.

SALAZAR, Robinson (2001), “ Plan Colombia, Plan Dignidad y Plan Puebla Panamá, tres anillos para un solo dedo”, Ponencia en el Congreso de Las Américas, Cholula, Puebla.

Recursos electrónicos

Bases militares de Honduras

<http://www.airpower.maxwell.af.mil/almanac/spanish/honduras/honduras.html>

Centro de Estudios de la Paz

<http://www.inter-mediacion.com/centrospaz.htm>

Clausewitz Homepage

<http://www.monumental.com/cbassfrd/CWZHOME/CWZBASE.htm>

Clínica de Conflictos y Mediación

<http://www.inter-mediacion.com/clinicaconf.htm>

Colección Risbal

http://www.collectifs.net/risbal/index_ppp.htm

Colombia Analítica

<http://www.colombia.analitica.com/>

Colombia en paz

<http://www.colombiaenpaz.org/>

Cómo resolver conflictos

<http://www.inter-mediacion.com/crc.htm>

Compendio de información de la región Puebla-Panamá

<http://www.inegi.gob.mx/difusion/espanol/bvinegi/cirpuepan/indice.html>

Compendio sobre el Plan Colombia

<http://www.rebellion.org/plancolombia.htm>

Conferencia sobre terrorismo

http://www.seprin.com/conferencia_terrorismo/parte3.htm

Conflicto y guerra

<http://www.derechos.org/koaga/iii/cepeda.html>

Convergencia de ONG por la paz en Colombia

<http://www.galeon.com/pazcolombia/>

Crisis en Venezuela

<http://elgusanodeluz.com/>

Cultures & conflicts

<http://conflits.org/>

Democracia y drogas, drogas y democracia

<http://www.tni.org/drogas/proyecto/equipo.htm>

Desobediencia informativa

<http://www.lahaine.org/index.htm>

Diario Informes

<http://www.delosocial.org/informes.htm>

Drogas, democracia y cultivos ilícitos

<http://www.tni.org/drugs/research/propuesta.htm>

Especial sobre Colombia

<http://www.cip.fuhem.es/observatorio/indicadores/paises/colombia.html>

Foro para la paz

<http://www.upaz.edu.uy/foro/26al30.htm>

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

<http://burn.ucsd.edu/~farc-ep/>

Geopolítica y Ciencias Políticas

<http://geocities.com/jpaz.geo/josep3.html>

Geopolítica y política internacional

<http://www.geocities.com/CapitolHill/6121/JPAZmain.htm>

Grupo Antimilitarista de Carabanchel

<http://www.nodo50.org/moc-carabanchel/>

Guatemala, mapa de El Petén

<http://www.spanport.ucsb.edu/faculty/mcgovern/guatemala.html>

Hoja verde: plan contra las drogas en América Latina

<http://www.cajpe.org.pe/hojaverde8.htm>

Honduras militar

<http://www.redoc.org/concodoc/honduras.html>

Honduras, Revista Internacional

<http://www.hondurasri.com/index3.htm>

Informe del Consejo de Seguridad Nacional de Estado

<http://www.seprin.com/informes/control.htm>

Instituto de estudios políticos de Guatemala

<http://www.ipes.guate.com/>

La CIA en América Latina/ informes

<http://www.seprin.com/informes.htm>

Los peligros del Plan Puebla Panamá

<http://www.rebellion.org/internacional/ppp280702.htm>



Mama coca y el Plan Colombia
<http://www.mamacoca.org/>

Mapas de Colombia
<http://www.picosearch.com/cgi-bin/ts.pl>

Martin Shaw, Globalización
<http://www.martinshaw.org/globalviolence.htm>

Mary Kaldor, artículos
<http://www.theglobalsite.ac.uk/authors/kaldor.htm>

Mujeres y guerra
<http://www.icrc.org/spa/mujeres>

Nodo 50 contrainformación en la red
<http://www.nodo50.org/>

Observatorio de conflictos
<http://www.fuhem.es/cip/confli.html>

Página web. James Petras
<http://veaylea.freesevers.com/petras/petras.htm>

Países desmilitarizados en América Latina
<http://www.flacso.cl/paz12.htm>

Paramilitarismo y guerra sucia
<http://home.swipnet.se/anncol1/spanska-dok/Paramilitares/pagina-paras.html>

Petróleo en Costa Rica
<http://www.fire.or.cr/petroleo.htm>

Plan Colombia 2000
<http://www.presidencia.gov.co/webpresi/plancolo/plancolo.htm>

Plan Colombia norteamericano
<http://www.state.gov/p/wha/rt/plncol/>

Plan Colombia y EE.UU.
<http://www.geocities.com/vientossur/index.htm>

Plan Puebla Panamá
<http://ppp.presidencia.gob.mx/main.html>

Proceso de paz en Colombia
<http://colombia.analitica.com/politica/4382795.asp>

Revista *Pangea*
<http://revista.pangea.org/>

Robinson Salazar, Coordinadas para un acuerdo de paz en Colombia
<http://usuarios.lycos.es/politicaset/articulos/colombia.htm>

Tipos de violencia
<http://www.upaz.edu.uy/>

Vecinales y comunales
<http://www.chasque.apc.org/guifont/vecicomu.htm>

Violencia y regulación de conflictos en América Latina
<http://www.comala.com/inv.asp?sec=10&cod=26290>

Working papers violencia
<http://www.fas.harvard.edu/~drclas/publications/papers.html>